

Informe 0549/2008 y 0078/2009

La consulta plantea si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal la grabación de las conversaciones telefónicas que se reciben en la policía local y el almacenamiento posterior de las mismas, teniendo en cuenta que no queda registrado el número de teléfono desde el que se efectúan dichas llamadas y que no se aclara en la consulta en relación con qué finalidad se procede a dichas grabaciones.

La consulta plantea además la adecuación a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, de la cesión -por parte de funcionarios de la Policía Local- de los datos personales correspondientes a personas implicadas en accidentes de circulación al resto de las partes afectadas por dichos accidentes.

I

La primera cuestión a resolver en el presente supuesto, consiste en discernir si las conversaciones telefónicas a que la consulta se refiere se encontrarán sometidas a lo dispuesto en la mencionada Ley Orgánica. Para ello será necesario efectuar dos acotaciones previas:

a) En primer lugar, se plantea el problema de si dichas conversaciones pueden ser consideradas como datos de carácter personal, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal. A tal efecto y, con carácter general, debe indicarse que los artículos 1 y 2 de la citada Ley, extienden su protección a los derechos de los ciudadanos en lo que se refiere al tratamiento automatizado o no de sus datos de carácter personal, siendo definidos éstos en el artículo 3.a) de la Ley Orgánica como “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

b) En segundo término, y aun cuando nos hallemos ante un supuesto en que existan datos de carácter personal, será necesario que dichos datos se encuentren incorporados a un fichero, definido como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”, por el artículo 3 b) de la Ley.

No obstante, si la grabación estuviera digitalizada, nos encontraríamos ante un tratamiento automatizado necesariamente sometido a los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, aunque no haya fichero.

Pues bien, en relación con el primero de los criterios a los que se ha hecho referencia, debe indicarse que las grabaciones a las que se refiere la consulta sólo podrán ser consideradas datos de carácter personal en caso de que las mismas permitan la identificación de las personas que aparecen en dichas grabaciones, no encontrándose amparadas en la Ley Orgánica en caso contrario.

A nuestro juicio, en el caso que nos ocupa, aunque no pueda asociarse la grabación a un número de teléfono, las conversaciones telefónicas sí podrían contener muy probablemente datos de carácter personal que pudieran identificar, no ya a los interlocutores de la llamada, sino a cualquier persona a la que pudieran referirse en dichas conversaciones.

En cuanto a las conversaciones, se ignora cuáles son los criterios de conservación de las cintas en que las mismas se graban, debiendo indicarse que si las mismas pueden considerarse estructuradas en el modo al que se ha hecho referencia, el fichero se encontrará sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

Debe indicarse que el artículo 2.1 de la Ley Orgánica establece que “La presente Ley será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.”

Dicho lo anterior, en caso de que exista un sometimiento de los ficheros a la Ley Orgánica, será necesario para proceder al tratamiento de los datos el consentimiento de los afectados, tal y como dispone el artículo 6.1 de la Ley, debiendo informarse a los mismos de los extremos contenidos en el artículo 5.1 de la misma. Por este motivo, será imprescindible que, al proceder a la grabación de las conversaciones telefónicas en cuestión, se comunique al interesado, de forma que conste claramente su conocimiento, los extremos a los que hace referencia el artículo 5.1 de la Ley Orgánica, según el cual “los afectados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco: a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas. c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación. e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante”.

Por otra parte, dado que el artículo 6.1 de la Ley 15/1999 establece que “el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa”, las citadas grabaciones van a constituir la única prueba del consentimiento para el



tratamiento y los usos autorizados por el afectado, por lo que debe entenderse de interés de la consultante la conservación de las citadas cintas.

Con carácter general, debe partirse de que si tales grabaciones tienen trascendencia y entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/1999 desde el momento en que en las mismas se recojan datos personales de las personas que contactan con dicho servicio de atención telefónica, ello determinará la plena aplicación de los preceptos de dicha norma en relación con el tratamiento de datos de carácter personal que implica tal grabación, considerando a estos efectos lo establecido en el artículo 3 c) de la Ley, que define el tratamiento de datos como “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”. De ello resulta que la grabación de dichas conversaciones implica someter los datos personales de los que contactan con la policía local a procesos de tratamiento de datos, por ello será necesario informar al que contacte con la consultante de que la conversación va a ser objeto del citado tratamiento, no pudiendo el mismo efectuarse en caso de que el afectado se oponga a ello.

II

Por otra parte, en el escrito de consulta no se dice si el fichero de grabaciones telefónicas se utilizará para finalidades policiales. No obstante, debe recordarse que la Policía Local, en los Municipios donde exista, constituye una de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tal y como previene el artículo 2 c) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siendo sus funciones las reguladas en el artículo 53.1 de la propia Ley Orgánica.

Respecto de los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el artículo 22 de la Ley Orgánica 15/1999 establece que “1.- Los ficheros creados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contengan datos de carácter personal que, por haberse recogido para fines administrativos, deban ser objeto de registro permanente, estarán sujetos al régimen general de la presente Ley.” Dicho régimen sería el expuesto en el apartado anterior.

A su vez, el artículo 22.2 de la Ley Orgánica 15/1999, dispone que “la recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad”, añadiendo el artículo 22.3 que “la recogida y tratamiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los datos

a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7 (ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud y vida sexual), podrán realizarse exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta, sin perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de resolver las pretensiones formuladas en su caso por los interesados que corresponden a los órganos jurisdiccionales”.

A la vista de lo antedicho, cabe concluir que, de acuerdo con los principios de la Ley Orgánica 15/1999, la Agencia de Protección de Datos entiende que no habría inconveniente para que en el ejercicio de funciones específicas se utilicen o se permita las grabaciones telefónicas por parte de los efectivos de la Policía Local, siempre que:

- Se asegure que se utilizan únicamente aquellos datos que son adecuados, pertinentes y no excesivos;
- El tratamiento se realice en el marco de expedientes concretos y con necesidades debidamente justificadas, relacionadas con la “prevención de un riesgo real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, en cuyo caso deberá comunicarse la actuación de la Policía Municipal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes (artículo 53.2 de la Ley Orgánica 2/1986); y
- Se garanticen la confidencialidad y seguridad de los datos personales.

No debe olvidarse, por último, que el artículo 22 dispone en su número 4 que: “Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.

A estos efectos, se considerará especialmente la edad del afectado y el carácter de los datos almacenados, la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión de una investigación o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto, la rehabilitación y la prescripción de la responsabilidad.”

III

En cuanto a la cesión -por parte de funcionarios de la Policía Local- de los datos personales correspondientes a personas implicadas en accidentes de circulación al resto de las partes afectadas por dichos accidentes, debe señalarse que la comunicación de datos a la que se refiere la consulta constituye, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, una

cesión de datos de carácter personal, definida como “Toda revelación de datos efectuada a persona distinta del interesado”.

Por su parte, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica establece que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”, quedando exceptuado el consentimiento en aquellos casos en que así lo prevea una Ley.

Del tenor de dichos preceptos parece desprenderse que sólo será lícita la cesión de los datos personales de los individuos implicados en un accidente de circulación cuando exista previo consentimiento del interesado o una disposición con rango de Ley así lo prevea.

No obstante, en el supuesto objeto de consulta, si el resto de las personas implicadas en un accidente lo que solicitan es una copia del atestado policial sobre las circunstancias e implicaciones del mismo, entendemos que resultarán de aplicación los principios contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para el derecho de acceso por parte de quién ostente la condición de interesados en los términos indicados en la propia Ley, a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.

Por otra parte, conviene traer a colación que el denominado Fichero F.I.V.A (Fichero Informativo de Vehículos Asegurados) se constituye como un fichero de carácter público, creado por el artículo 23.1 del Real Decreto 7/2.001, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor. Debe recordarse que el citado Reglamento viene a desarrollar el régimen contenido en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, tras las reformas operadas por la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. La finalidad de este fichero, de acuerdo con el artículo 27 del mencionado Real Decreto, consiste en:

“Suministrar la información necesaria para que las personas implicadas en un accidente de circulación puedan averiguar a la mayor brevedad posible las circunstancias relativas a la entidad aseguradora que cubre la responsabilidad civil de cada uno de los vehículos implicados en el accidente y en facilitar el control de la obligación de asegurarse.

A estos efectos, tienen la consideración de implicados los perjudicados por accidentes de circulación, por daños en su persona o en sus bienes, pudiendo actuar por sí o por medio de representante debidamente acreditado”.

Igualmente, el Anexo del citado Real Decreto 7/2001 alude en su apartado 5º a la Cesión de los datos del F.I.V.A., estableciendo que la misma se efectuará a implicados en accidentes de circulación, al Ministerio del Interior y al Ministerio Fiscal, los Jueces y Tribunales.

En relación con la cesión de estos datos, debe aludirse a las Conclusiones y Recomendaciones del Plan de inspección de oficio al Consorcio de Compensación de Seguros, dictadas por el Director de la Agencia de Protección de Datos con fecha 23 de julio de 2.001. En la Recomendación Cuarta se indicó expresamente que:

“De la normativa aplicable se desprende que el Consorcio sólo podrá facilitar datos personales incluidos en sus ficheros automatizados a personas físicas y entidades públicas y privadas, a los efectos del cumplimiento de la normativa sobre Tributos y Seguros, así como para facilitar el control de la obligación de asegurarse, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el anterior apartado 1. 7”.

Dicho apartado 1. 7 de las Conclusiones de la Inspección de la Agencia de Protección de Datos, indicaba específicamente que:

“Con respecto al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados la finalidad de mismo es suministrar información por parte del Consorcio a las personas implicadas en un accidente de circulación referente a la entidad aseguradora que cubre la responsabilidad civil, según establece la Ley 30/1.995 y la Directiva 90/232/CEE.”

Todo ello en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.